

CRONICA DEL MES

Enero de 1983

Después de unos primeros días de relativa tranquilidad, el mes y el año se estrenaron con síntomas de un inicio de desmoronamiento de la pretendida solución para El Salvador. Profundas crisis en la institución armada y en el aparato político del Estado acompañaron a una de las mayores ofensivas de la guerrilla en los tres años de conflicto armado; la nueva certificación de Reagan encontró el mayor repudio mostrado hasta el momento.

Los sucesivos y persistentes rumores de golpe de Estado de parte de oficiales simpatizantes de D'Aubuisson y de sus ideas ultraderechistas, el fracaso militar en las reiteradas operaciones contra el FMLN, la lucha por el poder al interior de la institución armada, llegaron a un clímax con la orden militar de enero de 1983 por la que, entre otros cambios menores y ascensos, se retiraba del mando en Cabañas al tte. cnel. Sigifredo Ochoa Pérez y se lo enviaba de Agregado Militar a Montevideo. Ochoa se rebeló contra la orden, apoyado por toda su guarnición y con el respaldo de las autoridades civiles del departamento y las seccionales de los partidos políticos, y pidió, en cambio, la destitución del Ministro de Defensa, gral. José Guillermo García. Las mutuas acusaciones que se dirigieron ambos personajes llegaron a tonos ofensivos. Pero lo que estaba en juego era algo más que personal: la unidad y disciplina de la institución, el modo de llevar la guerra y las fuerzas políticas que están detrás de cada uno.

La institución castrense sufrió una polarización, pues fueron varios los oficiales que apoyaron a Ochoa en sus declaraciones. Al comienzo había un grupo importante de cuarteles de su lado. El Alto Mando logró poner de su lado a casi

la totalidad de los comandantes (el de la 1a. Brigada de Infantería y el de la Fuerza Aérea no firmaron el comunicado conjunto), el peso institucional y la decisión última del Presidente de la República, Comandante General de la F. A. Sin embargo, la crisis se fue llevando por la vía de la negociación, por medio de comisiones y delegados del más alto nivel, y se resolvió por un compromiso: Ochoa aceptaba dejar el mando, pero en vez de ir a Uruguay sería enviado con el mismo destino a la embajada en Washington, mientras que se mantenía la orden militar, la disciplina y la aparente unidad, pero había un compromiso de que en un tiempo corto García cesaría en su cargo de Ministro de Defensa, según anunciaría días más tarde D'Aubuisson en una conferencia de prensa.

El caso fue aireado por todos los medios de comunicación social, y no solamente la parte oficial, sino que también Ochoa, sus seguidores y simpatizantes sostuvieron declaraciones de prensa y enviaron comunicados, hasta que el supremo gobierno impuso la censura. Las fuerzas políticas mostraron sus predilecciones, con cierta cautela, y los Estados Unidos trataron de crear una imagen favorable de Ochoa.

La marejada de la crisis se extendió más allá de su solución. El cnel. Jarquín (diputado por ARENA) y varios miembros de su familia sufrieron un atentado en la carretera, con graves lesiones. La esposa de Ochoa y las de otros dos de sus oficiales, tuvieron un accidente de tránsito cuando iban a visitarlos, pero sin mayores consecuencias, y parece ser que no hubo intención alguna en el hecho. El mayor Rodríguez Sosa, segundo en el mando de Ochoa, padeció un intento de secuestro y/o eliminación física días más tarde,

cuando cuatro personas fuertemente armadas penetraron en su residencia y fueron repelidos por su defensa personal, quedando uno de los intrusos muerto. D'Aubuisson pareció crecido y victorioso, al atacar a García y demandar a la Asamblea una investigación de las acusaciones que éste le había hecho, así como de la aludida orden militar y sus consecuencias. El local sede de ARENA sufrió un atentado al arrojarle una granada y ser ametrallado.

No había concluido el problema militar, cuando afloró nuevamente en toda su algidez la crisis política. La renuncia de los ministros para la renovación del gabinete ya había creado tensiones. Los cambios habían sido insignificantes, fuera del nombramiento del nuevo Ministro de Salud, antes en manos de ARENA, pero que ahora el Presidente de la República había decidido que fuera el Dr. Napoleón Cárdenas, miembro de AD. La ratificación de la Asamblea se fue posponiendo, ya que ARENA consideraba que ese puesto le correspondía y AD no tenía ningún derecho al no haber firmado el Pacto de Apaneca. El día 27 ya no se pudo posponer más tratar dicho asunto, pero el Presidente de la Asamblea suspendió la sesión y se retiró con todo su partido. Todos los demás, incluidos los "autónomos", decidieron reunirse, modificar el reglamento interno, ratificar al nuevo Ministro de Salud y proceder por mayoría: 39 diputados votaron a favor y ninguno en contra. ARENA denunció airadamente la decisión de los demás, y amenazó con la renuncia a los puestos directivos si no se invalidaba lo aprobado. Finalizado el mes todavía no se había resuelto la crisis.

Frente a estos graves problemas, los demás sucesos parecen anécdotas más bien folklóricas. Mons. Aparicio actuó de orador invitado por la Cámara Americana de Comercio, para repetir ideas ya expresadas en diferentes ocasiones, formular graves acusaciones contra personas e instituciones que a consecuencia de esto pueden correr graves peligros y para pronunciarse furiosamente contra el diálogo con la izquierda (asesinos, los llamó), en contra de lo sostenido por la conferencia episcopal (él también firmó el documento siendo vicepresidente de la misma), en contra de los repetidos mensajes del Papa, pero en profunda concordancia con lo manifestado pocos días antes por los firmantes del pronunciamiento de la Cruzada Pro Paz y Trabajo (grupo furibundo de ultraderecha) También fue algo pintoresca la campaña desatada contra algunos diplomáticos en el exterior, vinculados a la DC;

entre ellos, el embajador en Washington, Rivas Gallont, presentó su renuncia irrevocable, pero días más tarde se dio a conocer que seguía en el cargo.

En el aspecto económico, la crisis que afecta al país se siguió manifestando en diversos aspectos de la realidad: recortes en el presupuesto (especialmente en educación) con todas sus consecuencias, atraso en el pago de aguinaldos y salarios, despidos laborales y temor de perder el puesto de trabajo, conflictos y exigencias laborales, reclamos de la CTS contra algunos directivos sindicales, etc. La intensificación de los daños de guerra y de los sabotajes produjeron mayores pérdidas en el mes. Pero en enero se desató una ola de denuncias de corrupción. El caso de Correos fue el más clamoroso, por la pérdida de miles de giros y cheques, que eran cobrados fuera del país, y no llegaban a las humildes familias de los emigrantes salvadoreños; el caso fue investigado por una comisión de la Asamblea, hasta que se mostró que el director de la oficina, el cnel. Martínez, y varios de sus más cercanos colaboradores, eran responsables de los cuantiosos robos, por lo cual fue destituido, pero salió del país hacia Miami en contra de la prohibición que había; en fin, un empleado de Correos fue muerto a tiros por un compañero, sin quedar esclarecido el caso. Entre las desapariciones, había colecciones de estampillas, por valor millonario, una de las cuales resultó estar en poder de Duarte, quien la devolvió excusándose de no saberlo. También se denunciaron casos de corrupción millonaria en el BFA, en el IRA, e incluso los cafetaleros acusaron de corrupción estatal escandalosa.

Casi coincidiendo con la rebelión de Ochoa, el FMLN inició una nueva ofensiva militar a nivel nacional, denominada "héroes de enero de 1981", que no había terminado con el mes y que culminó con la toma de Berlín (Usulután), la mayor ciudad conquistada hasta el momento, el propio día 31, después de dos días de lucha. La aviación militar bombardeó la ciudad, incendiando y destruyendo cuatro manzanas de casas, como lo anunció el mismo día La Voz de los Estados Unidos (excusándose de que ellos no dirigían la guerra, sino los salvadoreños) y lo mismo, con más detalles, narró un habitante de Berlín que fue entrevistado esa tarde por Radio Sonora.

De un total de 475 acciones que realizó el FMLN durante el mes de enero, 181 fueron estrictamente militares (42 en el departamento de

San Salvador, 39 en el de Usulután, 31 en el de San Vicente, 22 en el de Chalatenango, 20 en el de Morazán, 17 en el de Cuscatlán) y 143 de sabotaje, entre las cuales, quizás la de mayor importancia haya sido el causar graves daños a la estructura del puente del ferrocarril, el cual se encuentra junto al dinamitado Puente de Oro, cortando todo el tráfico por la carretera del Litoral. Causaron 114 muertos a la Fuerza Armada, (3 subtenientes, 2 sargentos, 1 subsergente, 3 cabos y 105 soldados), pero si se incluye a los paramilitares llegarían a las 270 "bajas" (146 muertos, 112 heridos y otras 12 bajas), mientras que el FMLN habría tenido 78 muertos y 13 heridos (91 "bajas"), si bien COPREFA anunció la muerte de unos 220 guerrilleros en Morazán, mientras que Radio Venceremos negaba que hubieran tenido baja alguna allí. El FMLN recuperó en el mes 403 armas largas (209 en Usulután, 82 en Chalatenango, 61 en Morazán, 47 en San Vicente y 4 en Cuscatlán), derribó un helicóptero, hizo más de 150 prisioneros militares, y tomó 10 poblaciones (Tejutla, San Francisco Morazán, Cacaopera, Jocoaitique, Meanguera —ésta última— retomada en pleno operativo de la F.A. y tras dinamitar el Puente Torola—, Concepción Quezaltepeque, La Palma, Alegría, San Francisco Javier y Berlín), además de otras 10 poblaciones tomadas por breve tiempo y abandonadas casi inmediatamente.

El sabotaje fue intenso en este mes: la energía eléctrica fue repetidamente cortada, sobre todo en el oriente del país, pero también en el resto, y de modo especial en Texistepeque y en gran parte del departamento de Santa Ana. La caña de azúcar sufrió quemaduras de 3.445 manzanas (68.022 Tns.), lo que supuso pérdidas de 3,404,100 colones (más 4.000 pacas de bagazo incendiadas). De algodón fueron quemados 4.000 qq. En el café fueron quemados 16.000 sacos ya listos para la exportación y fue destruido el beneficio de Daglio en Ateos (La Libertad). En la producción agropecuaria robaron importantes cantidades en dos haciendas, destruyeron tres instalaciones agrícolas con su equipo y se robaron varios miles de gallinas. En telecomunicaciones los daños ascendieron a medio millón de colones; en el transporte, a 660.000 colones; y en la industria, sólo en el atentado contra "La Indiana" las pérdidas llegaron al cuarto de millón.

Del lado contrainsurgente, la F.A. montó un gigantesco operativo en Morazán, con 6.000 hombres, entre los que estaban los tres batallones especiales, a partir del 17 de enero y que se exten-

dió por 23 días. COPREFA informó que había recuperado el control de toda la zona norte, que desmanteló varios campamentos guerrilleros, con captura de armas y otros implementos, entre ellos partes de una repetidora de radio; en cambio, el FMLN (además de lo ya indicado antes) dijo que empantanó al ejército, sobre todo al batallón Atonal, le infligió muchas bajas y recuperó armas e hizo prisioneros. Además de eso, la Fuerza Aérea y la artillería realizaron bombardeos de saturación sobre las posiciones del FMLN en el volcán de Guazapa, en Cuscatlán, en el volcán Chichontepec y en los cerros de San Pedro. Nuevas juramentaciones de tropa se tuvieron en el mes: 190 reclutas en el cuartel San Carlos, 160 en caballería, y en Sonsonate quedó completo el batallón Jaguar (según fuentes militares, se piensa aumentar las tropas de 33.000 a 43.000 soldados durante el presente año).

Entre la población civil, las cifras provisionales del mes (que probablemente serán superadas por los datos de la última semana, que aún no se conocen con exactitud) arrojan un total de 437 asesinados (5 estrangulados y 3 decapitados), de los cuales 7 habrían sido "ajusticiados" por el FMLN y el resto por la derecha y principalmente por grupos militares y afines. Otras 79 personas fueron capturadas.

En el plano internacional la nueva certificación de Reagan sobre los progresos en El Salvador atrajo la atención. Antes del 21 de enero, fecha en que el Secretario de Estado presentaría el documento ante el Congreso, numerosas visitas y delegaciones vinieron al país (unas 17) para informarse de la situación, desde altos delegados militares, como el gral. Odom, hasta congresistas y senadores, familiares y amigos de los norteamericanos asesinados, profesores universitarios, publicistas, periodistas, artistas y una gran variedad de personajes. La certificación reconoce que los niveles de violación de los derechos humanos en El Salvador son inaceptables, que la F.A. estuvo implicada en por lo menos dos masacres de población civil el año anterior (noviembre), pero que ha habido una cierta mejoría (como la mitad de víctimas), un interés oficial por superar tales abusos y que es necesario continuar con la ayuda militar y económica. Las protestas contra la certificación también fueron en esta ocasión más enérgicas y violentas que nunca, acusando al gobierno de Reagan de falsario y cinico, desde altos senadores y congresistas (Kennedy, Solarz, Dodd, entre los más cualificados), hasta organizaciones e instituciones; varias mani-

festaciones en contra se congregaron en Washington y en otras ciudades, con cien o más capturados en cada una de ellas.

El director de la CIA, William Casey, testificó secretamente ante el Congreso que las operaciones encubiertas contra Nicaragua no van a desestabilizar a ese país, sino a impedir el reabastecimiento de armas a El Salvador, cosa que cuestionó el Comité de Inteligencia del Congreso. Mientras tanto, los principales sindicatos norteamericanos se oponen a un trato preferencial a países violadores de los derechos humanos, principalmente Haití, Guatemala y El Salvador. El gobierno de EEUU se propone aumentar la ayuda a Guatemala y El Salvador, al tiempo que prepara operativos militares conjuntos con Honduras en la frontera con Nicaragua, y en la zona del Canal de Panamá, mientras ese último país protesta por el uso de la Zona para atacar a Centroamérica, establece comunicaciones de alto nivel con República Dominicana, Venezuela y México y organiza una reunión de cancilleres de estos dos últimos países y de Colombia en la isla Contadora para analizar la situación en el área y encontrar salidas políticas alternativas.

En Nicaragua se congregaron los más altos representantes de los "países no alineados" para preparar la reunión de Nueva Delhi, ocasión que fue aprovechada para dar un fuerte respaldo internacional a la revolución sandinista y para reconocer oficialmente al FDR-FMLN de El Salvador. El gobierno nicaragüense, por otro lado, protestó enérgicamente por las operaciones militares conjuntas que se van a realizar junto a su frontera norte y por el apoyo a los grupos somocistas y contrarrevolucionarios que no cesan en sus hostigamientos y enfrentamientos armados con grandes saldos de víctimas. La nacionalización del comercio interno de varios productos (aceite, harina y jabón), así como el proyecto de

entregar las viviendas a sus inquilinos, está produciendo nuevas fricciones, aunque las medidas beneficien a las mayorías.

En Honduras se proponen incrementar el ejército con tres nuevos batallones, para cubrir militarmente todo el país. El alto mando militar lanzó la idea de revitalizar el CONDECA, lo que estaría aclarando toda la urdimbre para sofocar los movimientos revolucionarios en la región y estrangular a Nicaragua. Pero al mismo tiempo la cancillería reclamó al gobierno salvadoreño porque el ejército violó el territorio hondureño y asesinó a un campesino hondureño; protesta que no recibió respuesta ni disculpas luego de varios días de haberse formulado oficialmente.

Costa Rica se ha visto acosada por EEUU e Israel para entrar por la vía militarista, aunque el Ministro de Seguridad negara que su viaje a Israel fuera para obtener ayuda militar (sólo de contrainsurgencia y antiterrorismo). Guatemala, en cambio, no oculta el recibir ayuda militar norteamericana, pero no logra que el nuevo intento de solucionar las diferencias con Belice llegue a nada positivo en la reunión de ambos países y Gran Bretaña en Washington. Mientras tanto, el Tribunal Permanente de los Pueblos, reunido en Madrid, condenó a Guatemala y su actual gobierno por la represión, aduciendo que desde marzo ha habido por lo menos 8.000 víctimas del pueblo a manos de las fuerzas gubernamentales y acusó a oficiales guatemaltecos de **canibalismo**, por comerse el corazón y el hígado de sus víctimas.

Un mes, como se ve, preñado de acontecimiento y crisis a todo nivel, que parecen presagiar el ocaso de un proyecto para El Salvador y el área, pero que aún no dejan atisbar un amanecer distinto, por la cerrazón frente al diálogo y a otras soluciones políticas.

Eugenio C. Anaya h.